



Consejo Económico y Social

Distr. general
10 de mayo de 2023
Español
Original: inglés

Período de sesiones de 2023

25 de julio de 2022 a 26 de julio de 2023

Serie de sesiones de alto nivel

Acta resumida de la 12ª sesión

Celebrada en la Sede (Nueva York) el martes 14 de marzo de 2023 a las 15.00 horas

Presidenta: Sra. Stoeva (Bulgaria)

Sumario

Tema 5 del programa: Serie de sesiones de alto nivel sobre el tema “Acelerar la recuperación después de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a todos los niveles” (*continuación*)

c) Foro sobre Cooperación para el Desarrollo (*continuación*)

Mesa redonda: “Ampliar la cooperación eficaz para el desarrollo en pro de la resiliencia ante el clima”

La presente acta está sujeta a correcciones.

Dichas correcciones deberán presentarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en un memorando y también incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse lo antes posible a la Jefatura de la Sección de Gestión de Documentos (dms@un.org).

Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org>).

23-04681 (S)



Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Tema 5 del programa: Serie de sesiones de alto nivel sobre el tema “Acelerar la recuperación después de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a todos los niveles” (continuación)

c) Foro sobre Cooperación para el Desarrollo (continuación) (E/2023/48)

Mesa redonda: “Ampliar la cooperación eficaz para el desarrollo en pro de la resiliencia ante el clima”

1. **La Presidenta** dice que en la mesa redonda se explorarán las oportunidades de integrar la resiliencia climática en la cooperación para el desarrollo, con el fin de abordar vulnerabilidades multidimensionales.

2. **La Sra. Conde Choque** (Punto Focal del Grupo Mundial de Jóvenes Indígenas de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe), hablando por videoconferencia, dice que los Pueblos Indígenas continúan luchando por el goce de sus derechos y por la seguridad jurídica respecto a sus tierras, territorio y recursos naturales. Esa lucha, heredada por la juventud indígena, se orienta especialmente al reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, y a garantizar el respeto del consentimiento libre, previo e informado. Respecto al cambio climático, la presencia de megaproyectos y el incremento de actividades extractivas suponen una crisis para los Pueblos Indígenas en nombre del desarrollo. El desarrollo no solo se refiere al crecimiento económico, sino que se basa asimismo en el bienestar de los territorios pertenecientes a los Pueblos Indígenas. Ante este panorama, es preciso enfrentar los desafíos que plantean la reducción y gestión de riesgos y la acción climática.

3. Los territorios indígenas desempeñan un papel fundamental a la hora de prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas, como la enfermedad por coronavirus (COVID-19), y la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado la importancia del enfoque multisectorial “Una sola salud”, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, relativo a la salud y el bienestar. Ese enfoque busca la colaboración para lograr una salud óptima para las personas, los animales y el medio ambiente. Proteger la salud del planeta es proteger la salud de todo el mundo y evitar futuras crisis mundiales. Una de las soluciones para los sistemas sostenibles de gestión de riesgos es proteger y promover los territorios, los Gobiernos y la libre determinación de los Pueblos Indígenas. Los indicadores para la inclusión del consentimiento libre, previo e informado y los conocimientos tradicionales son clave para evaluar el

progreso de acciones climáticas. Al acudir a los territorios indígenas en busca de soluciones, hay que preguntarse sobre las formas de trabajar de manera efectiva con los actores de la cooperación y los Pueblos Indígenas.

4. Con respecto a la financiación, si bien se aprecian los compromisos asumidos por varios Estados y donantes para financiar la protección forestal, solo un pequeño porcentaje del financiamiento prometido se entregó directamente a los Pueblos Indígenas. Ese financiamiento debería distribuirse directamente a las organizaciones indígenas para luchar contra el cambio climático, pues muchas organizaciones intermediarias no conocen cómo viven los Pueblos Indígenas en sus territorios, por lo que sus medidas no se adaptan a las necesidades de esas comunidades. Por ello, deben tenerse en cuenta los principios de financiamiento de los Pueblos Indígenas, que históricamente han encabezado la lucha contra el cambio climático. En América Latina se cometen tres cuartas partes de los asesinatos de defensores del medio ambiente, y más de la mitad de las personas asesinadas son jóvenes indígenas. Pese a estos datos, el fondo de pérdidas y daños no menciona a los Pueblos Indígenas. La medición del financiamiento climático debe mirar más allá de aspectos como la cantidad del financiamiento desplegado y su alcance geográfico. Debe prestarse más atención a la cantidad de financiamiento que se destina a atender las necesidades y el bienestar de las comunidades afectadas, a quién se dirigen los proyectos y a la forma en que estos benefician a las comunidades. También debe tomarse en cuenta el fortalecimiento de la resiliencia y las iniciativas de los grupos marginados y vulnerables, incluidos los Pueblos Indígenas, para garantizar la equidad social.

5. La protección de los territorios indígenas podría solucionar el reto dual de reducir y gestionar los riesgos, al tiempo que se adoptan medidas relacionadas con el clima. El financiamiento debe proporcionarse directamente a los pueblos, las mujeres y la juventud indígenas, así como a otros grupos, para luchar contra el cambio climático. Los mecanismos de financiamiento deben ser transparentes, e incluir datos más exhaustivos, como el número de proyectos liderados por Pueblos Indígenas. El financiamiento y la compensación monetaria no son la única solución, y no deben distraer la atención de los casos de violación de los derechos humanos, especialmente en los territorios indígenas.

6. **La Sra. Al-Mashat** (Ministra de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Egipto), en una declaración grabada en video, dice que la serie de sesiones de alto nivel del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo es una plataforma oportuna para impulsar

políticas de cooperación para el desarrollo, habida cuenta del cambio en las dinámicas mundiales y en las prioridades de los países en desarrollo, que tienen como objetivo fomentar la resiliencia a largo plazo. En un contexto de múltiples desafíos mundiales, la mesa redonda pondrá de relieve los puntos de vista y las oportunidades existentes para incorporar la resiliencia a la cooperación para el desarrollo, con el fin de abordar las vulnerabilidades polifacéticas que están afectando, en particular, a las economías emergentes y en desarrollo.

7. Cada vez se necesita más financiación para lograr el desarrollo sostenible y mejorar la resiliencia de los países, pero las inversiones que se han movilizadas no han bastado para satisfacer las necesidades estimadas. Cada año, los desastres naturales causan daños infraestructurales por valor de miles de millones de dólares en los países de ingreso bajo, y el cambio climático ha costado al mundo más de 1,3 billones de dólares en el último decenio. En 2022, los desastres meteorológicos causaron daños por valor de más de 29.000 millones de dólares y se prevé que esta cifra aumente considerablemente en los próximos decenios. Así pues, es cada vez más necesario movilizar financiación adicional para la resiliencia, pues cada dólar invertido en infraestructuras resilientes puede generar cuatro dólares y, con ello, dar a la población acceso a diversas oportunidades económicas, mejor salud, educación y medios de subsistencia. El panorama actual de la financiación climática debe ser más equilibrado y justo, pues más del 75 % de los flujos mundiales de financiación se recaudan y emplean a nivel nacional, lo que representa un desafío para las economías en desarrollo que disponen de un acceso limitado a la financiación. Mientras que Asia Oriental y el Pacífico, Europa Occidental y América del Norte reciben el 75 % de la financiación, las regiones que menos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, y que son las más vulnerables al cambio climático, como África, reciben menos del 5 % de esa cantidad. Del mismo modo, a nivel sectorial, la inversión en adaptación al cambio climático y resiliencia es insuficiente y representa menos del 10 % de la financiación climática.

8. Con ese telón de fondo, el 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático puso en primer plano las necesidades y preocupaciones de las economías en desarrollo y emergentes, destacando la importancia de la adaptación, la resiliencia y la financiación de las pérdidas y daños. Entre las iniciativas presentadas en ese período de sesiones figura una guía para una financiación justa, en la que se ofrece

una definición de la financiación justa y se proponen 12 principios básicos en los que se enfatiza no solo la necesidad de aumentar la inversión para la adaptación y la resiliencia climáticas, sino también la importancia de armonizar esa financiación con las prioridades de los países. Asimismo, en la guía se trata el limitado acceso de los países en desarrollo a los fondos para el clima y se ofrece un listado de proveedores de capital en el que se detallan sus criterios de acceso, su apetito de riesgo, las regiones y sectores de su interés, el volumen de inversión exigido y sus instrumentos de financiación. La guía concluye con un programa de acción para cada parte interesada en el que se describen someramente las funciones que estas pueden desempeñar a fin de lograr resultados de financiación justos y también para maximizar la eficacia y eficiencia de la arquitectura de financiación climática existente. Entre sus principales recomendaciones figura la necesidad de ampliar la financiación de la adaptación, la resiliencia y las pérdidas y daños, mediante el despliegue de fondos adicionales por parte de los proveedores de capital, en particular para proyectos con rentabilidad financiera escasa o nula.

9. En este sentido, los esfuerzos colectivos por abordar y mitigar las repercusiones de las pérdidas y daños deben armonizarse con el fomento a nivel mundial de las políticas en pro de la resiliencia y con la exploración de nuevas técnicas y estrategias encaminadas a atraer inversiones y crear sociedades resilientes al clima, especialmente en los países en desarrollo. Las iniciativas internacionales para enfrentar los desafíos mundiales de la resiliencia climática requieren la participación de todas las partes interesadas pertinentes, a fin de desarrollar e implantar soluciones financieras innovadoras que permitan desbloquear las fuentes de capital disponibles. La titularidad nacional y el liderazgo de los países en desarrollo en sus trayectorias hacia el cambio climático son claves para orientar y alinear los esfuerzos internacionales, en pro de una colaboración más efectiva. En ese contexto, la plataforma egipcia para el nexo agua-alimentación-energía es reflejo de la labor de colaboración mundial y armonización con las pautas nacionales. En ella se incluyen proyectos de adaptación y mitigación de alta prioridad, que quedaron fijados en la estrategia nacional de cambio climático en consonancia con las contribuciones determinadas a nivel nacional. Asimismo, la plataforma ayuda a movilizar financiación junto con distintas partes interesadas a escala mundial y demuestra el poder de la acción colectiva.

10. **La Sra. Tonkonogy** (Directora de Climate Policy Initiative), moderadora, dice, presentando la mesa redonda, que la financiación mundial para la adaptación

al cambio climático sigue representando un porcentaje muy pequeño de la financiación climática total, y que la financiación climática y para la adaptación que se pone a disposición de los países en desarrollo no basta para satisfacer las necesidades crecientes de estos. Además, esa financiación no tiene en cuenta los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible ni la necesidad de ofrecer un apoyo multidimensional para responder a las múltiples crisis que enfrentan los países en desarrollo. A fin de mejorar la cooperación para el desarrollo y construir sociedades más resilientes, se requieren avances considerables en cuanto a los tipos de cooperación ofrecidos, los requisitos para participar de ellos, el volumen de la ayuda y sus modos de prestación, y la inclusividad de las alianzas. Los panelistas disponen de amplia experiencia y conocimientos sobre cuestiones claves, y ofrecerán ejemplos concretos de cooperación para el desarrollo tanto eficaz como ineficaz en el ámbito de la resiliencia climática. Examinarán cuestiones como la rendición de cuentas respecto de las vulnerabilidades relacionadas con el clima en la cooperación para el desarrollo, el déficit de financiación creciente en el ámbito de la adaptación y la necesidad de financiar las pérdidas y daños, sus experiencias en la respuesta a crisis múltiples, y la inclusión de las comunidades locales y vulnerables en las labores de cooperación.

11. Entre los obstáculos citados anteriormente se encuentra la falta de premura en la adopción de medidas, el predominio de los puntos de vista del Norte Global, la desconexión entre la cooperación climática y la cooperación para el desarrollo, y el mayor peso de las iniciativas a gran escala frente a las locales. A fin de superar esos obstáculos, que enmarcarán el debate, los oradores compartirán sus experiencias a nivel nacional en el ámbito del trabajo conjunto con los asociados para el desarrollo.

12. **La Sra. Betancur González** (Directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia), panelista, dice que, si bien su país figura entre los primeros del mundo en cuanto a biodiversidad, fuentes hídricas y páramos, también ha vivido una historia terrible de desigualdad y conflictos internos. El Gobierno de Colombia se propone aplicar reformas ambiciosas y un plan trienal de desarrollo que se ajusta a la necesidad de cambio estructural y sitúa al ser humano y a la naturaleza en el centro de las políticas públicas. El plan propone alcanzar la paz, luchar contra el cambio climático y emprender una transición energética justa solucionando los conflictos económicos, sociales y ambientales, pues la justicia ambiental y la adaptación al cambio climático son claves para lograr la paz en Colombia y en todo el

mundo. Estas propuestas han abierto nuevos debates sobre el desarrollo sostenible mundial en los espacios internacionales, pues la humanidad enfrenta un desafío común de enormes proporciones, en el que está en juego la preservación del planeta.

13. En este sentido, la cooperación para el desarrollo, la banca multilateral, el sector privado, los Estados y la sociedad civil deben actuar a tiempo para enfrentar este urgente desafío mundial, que afecta sobre todo a los más desfavorecidos, agudizando las desigualdades y comprometiendo la seguridad y la soberanía alimentarias. Si bien la movilización de financiamiento concesional y no reembolsable es una prioridad para Colombia, los bienes públicos globales son una responsabilidad compartida por todos los países, y los países más desarrollados deben cumplir sus compromisos financieros y de otros tipos. Se requieren urgentemente recursos financieros que no comprometan los limitados espacios fiscales ni representen un riesgo para la sostenibilidad de la deuda, en particular para los países de ingreso mediano, que son más castigados en el acceso a la financiación, pese a las desigualdades sociales que aún persisten. Puesto que son vulnerables al cambio climático, se debe lograr la priorización de América Latina y el Caribe en la asignación de estos recursos, que son escasos, toda vez que ambas regiones son el pulmón del mundo. Asimismo debe apoyarse la adopción de soluciones innovadoras de financiamiento, haciendo hincapié en alternativas, como el canje de deuda por adaptación climática, que permitan liberar recursos para avanzar medidas de mitigación, adaptación y pérdidas y daños, reduciendo así los costos financieros, especialmente elevados para los países de ingreso mediano.

14. La financiación de la cooperación para el desarrollo es insuficiente para hacer frente a las necesidades climáticas actuales y urge repensar la arquitectura financiera internacional para la adaptación, de modo que las acciones de los Estados se complementen con las de la banca privada y multilateral. La meta de invertir 100.000 millones de dólares es insuficiente, puesto que es necesario movilizar 4,5 billones anualmente. Para abordar las reclamaciones relativas a la falta de proyectos que estén listos para su implementación y ampliación, en la guía propuesta para la financiación justa se destacan dos recomendaciones, acogidas con beneplácito. La primera es crear un sistema de tramitación de proyectos de gran impacto y fortalecer la sociedad civil para que pueda participar en el desarrollo de esos proyectos de adaptación climática. La segunda es la necesidad de que el sector privado se implique en los planes de financiamiento del desarrollo ambiental y participe en

ellos, a fin de llenar las grandes lagunas existentes en materia de adaptación al cambio climático y transición energética. En este sentido, el Gobierno de Colombia busca articularse con la filantropía, los inversores de capital riesgo y la banca multilateral para que apuesten por la acción climática, a fin de desarrollar proyectos que reflejen mecanismos innovadores de financiación y resalten los saberes locales sobre la adaptación y la resiliencia climáticas.

15. La campaña Global Nation propuso cuatro grandes medidas para innovar en la cooperación para el desarrollo y la adaptación climática, a saber, implementar una campaña mundial sobre adaptación climática, lo que significa impulsar estrategias pedagógicas y llegando a los ciudadanos de forma sencilla pero contundente; aumentar la financiación pública; mejorar la eficiencia y la gobernanza de los fondos; y modernizar el apoyo al fortalecimiento de capacidades para convertirlo en un modelo de cooperación circular y en doble vía. Ha llegado el momento de diseñar una hoja de ruta clara que armonice la cooperación para el desarrollo con la adaptación climática, con el objetivo de avanzar juntos y crear resiliencia climática.

16. **El Sr. Akram** (Representante Permanente del Pakistán ante las Naciones Unidas), panelista, dice que, en el contexto de la evolución del calentamiento global y el cambio climático, el concepto de desarrollo ha cambiado y exige hoy un nuevo enfoque, no solo de los diferentes aspectos del crecimiento económico, sino también de la resiliencia. Las pérdidas económicas provocadas por los desastres naturales han pasado de los 70.000 millones a los 170.000 millones de dólares anuales en menos de tres decenios, y se prevé que su frecuencia aumente aproximadamente un 40 % de aquí a 2030. Así pues, la planificación para el desarrollo debe tener en cuenta el riesgo climático, especialmente en los países más vulnerables al clima. El año anterior, el Pakistán tuvo que hacer frente a inundaciones desastrosas que provocaron pérdidas económicas cercanas a los 30.000 millones de dólares. A raíz de ello, el Gobierno del Pakistán diseñó un plan de reconstrucción que requerirá cerca de 16.500 millones de dólares para la reparación de infraestructuras. Cuando se incorporó a ese plan el factor de resiliencia, las necesidades de financiación aumentaron en 13.500 millones de dólares. Ese ejemplo demuestra claramente que el desarrollo para la resiliencia representaría una mayor carga financiera para los países.

17. Por lo tanto, es preciso fusionar los conceptos de desarrollo económico y resiliencia climática, y cambiar el enfoque de la financiación climática para incrementar la financiación de la adaptación, pues las medidas de

mitigación no avanzan con suficiente rapidez. Afortunadamente, sin embargo, en la mayoría de los casos, la adaptación implica la creación de infraestructuras sostenibles, que en sí mismas son un elemento central del desarrollo sostenible. Estas infraestructuras requerirían un mínimo de 1 billón de dólares de inversión anual en los países en desarrollo, y aún están por determinar las fuentes y los beneficiarios de esa financiación. La idea de que el sector privado podría aportar financiación para la adaptación y el desarrollo es peligrosamente engañosa, pues las infraestructuras sostenibles requieren financiación a largo plazo y no ofrecen el perfil de la relación riesgo-rentabilidad que suele asociarse a los proyectos comerciales. Así pues, la mayoría de los proyectos de infraestructuras necesitarán algún elemento de financiación pública, y existen al menos 60 países en desarrollo incapaces de movilizar los recursos necesarios, porque enfrentan actualmente crisis de deuda. En esos casos, podría obtenerse la financiación recanalizando los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados y permitiendo a los bancos multilaterales de desarrollo apalancar una parte de esos DEG; la financiación podría proceder asimismo de la asistencia oficial al desarrollo (AOD).

18. Dado que los países en desarrollo no tienen capacidad para formular proyectos viables por sí solos, debería crearse un servicio de preparación de proyectos en el contexto de las Naciones Unidas, junto a una junta normativa, para que las oficinas en los países puedan ayudar a los Estados que necesiten asistencia a acceder a financiación pública y privada. A ese respecto, el Pakistán ha tenido la oportunidad de elaborar su plan de reconstrucción en colaboración con las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y la Unión Europea. Los países en desarrollo necesitan de esta labor conjunta para preparar sus proyectos de desarrollo y atraer inversiones internacionales.

19. **El Sr. Sylla** (Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)), panelista, señala que el tema de la mesa redonda reviste especial importancia para los países en desarrollo, sobre todo de África, que se ven desproporcionadamente castigados por el cambio climático, si bien contribuyen mínimamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las prioridades para los países en desarrollo son mitigar los efectos del cambio climático, fortalecer la resiliencia y lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. Aunque el FMI ha adaptado su mandato para satisfacer las cambiantes necesidades mundiales, su principal ámbito de competencia sigue siendo la estabilidad macroeconómica, en particular la balanza de pagos y las

operaciones fiscales. En un esfuerzo por responder a la naturaleza macrocrítica del cambio climático y su impacto en las finanzas y la balanza de pagos de los Gobiernos, el FMI ha creado una nueva herramienta para financiar las reformas de los países. Se trata del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Estabilidad, cuyo objetivo es ayudar a los países de ingreso bajo y a los países de ingreso mediano vulnerables a emprender cambios estructurales a más largo plazo, como los relativos a la preparación frente a pandemias y frente al cambio climático, con financiación a largo plazo y bajo costo. El Fondo Fiduciario, que ofrece un plazo de vencimiento de 20 años y un período de gracia de 10 años, con tipos de interés muy bajos, es el primer instrumento a largo plazo creado por el FMI, que normalmente proporciona financiación por períodos no superiores a cinco años.

20. Hasta la fecha, Rwanda es el único país africano que ha hecho uso del Fondo Fiduciario, por una cantidad de 390 millones de dólares; a Rwanda se suman el Ecuador y Barbados, y el Pakistán posiblemente lo haga en un futuro próximo. Ello ha sido posible gracias al sólido historial de Rwanda en materia de políticas y aplicación sostenible de las reformas. El Fondo Fiduciario apoyará al país en sus ambiciones de aumentar la resiliencia al cambio climático, al tiempo que contribuirá a impulsar una mayor financiación. Se han formulado preguntas sobre las posibles fuentes de financiación y, aunque la respuesta del FMI a esa pregunta es precisamente el Fondo Fiduciario, ha habido problemas para conseguir que algunos países cumplan sus compromisos. Hasta ahora solo se han comprometido para el Fondo Fiduciario unos 40.000 millones de dólares, de los 100.000 millones de dólares en DEG fijados como objetivo. El FMI no puede alcanzar sus objetivos trabajando en solitario; para ello es necesario colaborar estrechamente con los bancos multilaterales de desarrollo, las instituciones financieras internacionales y el sector privado. Es necesario mantener el compromiso de explorar opciones para movilizar recursos públicos y privados dirigidos a la lucha contra el cambio climático, y hacen falta soluciones financieras innovadoras para sortear los obstáculos que dificultan el acceso a la financiación climática privada.

21. Una cuestión aún más importante para tomar en consideración es qué uso se da a esos recursos. Pueden ofrecerse a los países en desarrollo recursos considerables dirigidos a mitigar el cambio climático, pero, en ausencia de instituciones de salvaguarda adecuadas que gestionen su uso, esos recursos podrían acabar utilizándose como apoyo presupuestario, sin que se obtengan los resultados previstos. Por consiguiente,

la buena gobernanza es fundamental para la gestión de la financiación climática, y los países deben demostrar que esos recursos se gastarán adecuadamente.

22. **La Sra. Gramajo Vilchez** (Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala), ponente principal, dice que, aunque el tema de la resiliencia climática aparentemente es técnico, en realidad afecta a las generaciones actuales y futuras, y es una cuestión de vida o muerte. Guatemala ha hecho importantes esfuerzos y ha adoptado un enfoque de responsabilidad mutua, en consonancia con la arquitectura internacional establecida. Por un lado, los países desarrollados deben proporcionar cooperación internacional a los países en desarrollo; por otro, los países de ingreso mediano, como Guatemala, necesitan un mayor acceso a los mecanismos de financiación existentes, pues son muy vulnerables al cambio climático.

23. En cuanto a los compromisos de fortalecer la financiación para la resiliencia climática, los países vulnerables al clima se están esforzando por desarrollar arquitecturas que franqueen el acceso a esos fondos y necesitan promulgar leyes que permitan llevar a término los procesos de adaptación y mitigación. Guatemala es el segundo país latinoamericano en aprobar una ley marco sobre cambio climático y, desde 2013, ha venido formulando una política nacional de cambio climático y un plan nacional de cambio climático, que establecen la contribución determinada a nivel nacional. El sistema nacional de planificación se ha internalizado en los planes departamentales del territorio y los planes locales de desarrollo y ordenación territorial, con el objetivo de garantizar que la planificación se incorpora al presupuesto y que hay un enfoque de gestión de riesgos, de cambio climático y de equidad en todo el proceso de planificación. Así, los proyectos financiados por el sector público podrán beneficiarse de una gestión adecuada. No obstante, los esfuerzos a nivel nacional han resultado insuficientes para acceder a los mecanismos y a los fondos de financiación, y, aunque su país en última instancia lo ha conseguido, ha debido superar para ello grandes dificultades. Como otros países de América Latina y el Caribe, Guatemala es muy vulnerable al cambio climático, y ha pedido en múltiples foros que esto sea tenido en cuenta por los fondos y los bancos multilaterales a la hora de asignar la AOD o el financiamiento para el desarrollo.

24. Los sistemas nacionales de inversión pública existentes deberían desarrollar herramientas de gestión de riesgos para tomar en cuenta los riesgos que entrañan los proyectos a mediano y largo plazo, al igual que otras opciones de cooperación internacional dirigidas a asegurar la gestión de los riesgos no solo

meteorológicos, sino sociales, económicos, políticos e institucionales que acarrearán las vulnerabilidades polifacéticas. Deben tomarse en consideración asimismo las evaluaciones de pérdidas y daños. En Guatemala han realizado evaluaciones de este tipo el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dieron como resultado un total acumulado de más de 6.000 millones de dólares en pérdidas y daños como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos. Esas evaluaciones de costos han de insertarse en el proceso de planificación, a fin de garantizar que se toman medidas al respecto. Debe asimismo considerarse la movilización junto con otros actores, como los gobiernos locales, y en Guatemala están elaborándose planes de desarrollo municipal en colaboración con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Por ello, el Gobierno de Guatemala trabaja con un amplio abanico de partes interesadas para garantizar que la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático se internalicen en la planificación, con el objetivo de proteger las vidas humanas.

25. La Sra. Del Rosario-Malonzo (Directora Ejecutiva de IBON International), ponente principal, hablando también en nombre de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo, dice que, en el contexto actual, caracterizado por las crisis múltiples, es de agradecer que se preste especial atención al papel de la cooperación para el desarrollo en la respuesta a las vulnerabilidades multidimensionales, en particular el cambio climático. Aunque es necesaria una cooperación para el desarrollo eficaz con miras a la resiliencia climática, también debe abordarse la cooperación para el desarrollo ineficaz, pues contribuye a los riesgos y daños climáticos. La capacidad de adaptación de las naciones y comunidades a los efectos del cambio climático es limitada, en un momento en que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves, y el Sur Global carece de las redes de seguridad y los recursos precisos para adaptarse. Por esta razón, resulta preocupante que la cooperación para el desarrollo pueda dar lugar a proyectos que desposean a los Pueblos Indígenas, como es el caso de la megapresa de Jalaur, en Filipinas, que recibe, desde hace tiempo, financiación de donantes, pese a los asesinatos y las violaciones de derechos que se han documentado entre las comunidades indígenas opuestas al proyecto. Es asimismo causa de gran inquietud el que las comunidades del Sur Global no puedan ya resistir las perturbaciones climáticas, cuando las intervenciones para el desarrollo las despojan de los recursos necesarios para protegerse. Los riesgos climáticos que enfrentan estas comunidades se ven agravados por

proyectos de cooperación para el desarrollo no sostenibles que siguen un modelo económico extractivista y son contrarios a los conceptos de titularidad democrática, la obtención de resultados significativos y el derecho a la libre determinación, al tiempo que exacerban la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos.

26. La cantidad y la calidad de la financiación se ven también afectadas por otros factores, y no se ha alcanzado la meta de 100.000 millones de dólares de financiación para el clima. Un porcentaje muy pequeño de esa cantidad está proporcionándose como AOD nueva y adicional, sobre todo en forma de préstamos, pese a que más del 80 % de los Estados insulares están ya sobreendeudados. Los países desarrollados están contabilizando doblemente sus compromisos financieros actuales, práctica que fragmentará y reducirá aún más los ya exiguos recursos asignados al desarrollo económico. Una cooperación para el desarrollo eficaz debe permitir a las poblaciones de los países en desarrollo fijar sus prioridades particulares para hacer frente a las repercusiones del cambio climático y determinar la forma más eficaz de aprovechar esa cooperación. La atención debe centrarse en la raíz estructural de las vulnerabilidades económicas y climáticas, con miras a tender vías que sean asumidas como propias por los sistemas democráticos, estén orientadas por ellos, se ajusten a las necesidades de la población y posibiliten la rendición de cuentas ante los titulares de derechos. Ello implicaría un cambio hacia modelos de desarrollo que defiendan los derechos de las comunidades sobre sus recursos. Un primer paso importante ha sido el establecimiento de un mecanismo específico de financiación de pérdidas y daños; los mecanismos de financiación climática deben basarse en la eficacia, la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas.

27. El Sr. Glennie (cofundador de Global Nation), ponente principal, dice que, según los criterios establecidos, la cooperación para el desarrollo ha de tener como objetivo explícito apoyar las prioridades de desarrollo y debe discriminar en favor de los países en desarrollo, basarse en relaciones de cooperación que busquen potenciar la titularidad de los países en desarrollo, y no estar movida por el lucro. Existen tres tipos de cooperación para el desarrollo: las transferencias financieras y en especie, el apoyo a la capacidad y el cambio en las políticas. Los cuatro principales obstáculos a una cooperación para el desarrollo eficaz en el ámbito de la adaptación al cambio climático son la falta de premura, el predominio de los puntos de vista del Norte, la desconexión entre clima y

desarrollo, y el mayor peso de las iniciativas a gran escala frente a las locales.

28. Si bien la financiación privada es un complemento importante, pues la mayor parte del gasto en cooperación para el desarrollo no ofrece un rendimiento financiero, se necesitaría una financiación pública considerablemente mayor para superar los principales obstáculos mencionados. En este sentido, la Iniciativa de Bridgetown propone ampliar el acceso a la financiación en condiciones favorables para los países vulnerables al clima, ampliar en un billón de dólares los préstamos de los bancos multilaterales para lograr los objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hacer que el sistema financiero resista más eficazmente las perturbaciones mediante la inclusión de cláusulas relativas a desastres naturales y pandemias. En última instancia, se necesita una financiación mucho mayor en forma de subvenciones, puesto que casi dos de cada tres países de ingreso bajo corren ya el riesgo de sufrir una crisis de deuda, y los tipos de interés más elevados dificultan el servicio de esta. Pese a ello, cerca del 80 % de la financiación climática se concede en forma de préstamos, la mitad de ellos a precio de mercado. La mayoría de los países de ingreso mediano atraviesan asimismo dificultades a la hora de gestionar la carga de la deuda, como consecuencia de la crisis financiera y de la pandemia de COVID-19, y es inaceptable pedir que se endeuden aún más para pagar los gastos de adaptación, cuando no son responsables del cambio climático.

29. Los obstáculos a una cooperación para el desarrollo eficaz también podrían sortearse mejorando la eficacia de la gobernanza de los grandes fondos, que en su mayor parte siguen siendo un reflejo de la geopolítica de las décadas de 1950 y 1960. Para lograr una descolonización auténtica de la asistencia, es necesario que las voces del Sur Global se escuchen en los debates sobre la adaptación al clima y que el poder de decisión recaiga en los Gobiernos y las sociedades civiles de los países en desarrollo. Además, deben simplificarse los procedimientos de financiación para que las organizaciones locales y los Gobiernos nacionales puedan acceder a ella. Se ha de modernizar el apoyo a las capacidades y establecer estructuras que permitan compartir más eficazmente los conocimientos y experiencia provenientes de todas las partes del mundo. Es necesario ofrecer un mayor apoyo a las campañas de adaptación al cambio climático, en lo referido tanto al volumen como a los tipos de cooperación para el desarrollo proporcionada, pues es poco probable que los cambios sean significativos, y no serán sostenibles sin el apoyo de la sociedad en general, en particular en los principales países contribuyentes.

30. **El Sr. Adom** (Observador de Côte d'Ivoire) dice que, aunque son responsables de solo el 3 % de la contaminación mundial, los países en desarrollo siguen sufriendo las consecuencias del cambio climático y están encontrando dificultades para fortalecer su resiliencia. Las perspectivas de desarrollo a largo plazo de la mayoría de esos países están bajo amenaza, y la situación se ve exacerbada por el déficit de financiación de la acción climática, que podría empujar a sus poblaciones a la pobreza extrema, especialmente en África. Sería necesario intensificar las medidas de adaptación y resiliencia para enfrentar esta difícil situación y, a este respecto, en el 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se subrayó la importancia de financiar las pérdidas y daños mediante la creación de un fondo para ayudar a los países en desarrollo a recuperarse de los efectos del cambio climático y los desastres naturales. El orador agradecería recibir más información sobre la forma de poner en funcionamiento el fondo de pérdidas y daños rápidamente, y recomendaciones sobre cómo financiar iniciativas destinadas a aumentar la resiliencia en los sectores estratégicos de la agricultura, la energía y el agua de los países africanos.

31. **El Sr. Sullivan** (Observador de la Campaña Man Up) afirma que los Gobiernos deben aplicar una política fiscal activa para tomar la iniciativa en sus economías, a fin de cumplir de forma integrada los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París, el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es preciso que las políticas industriales tengan en cuenta la conservación, con el fin de establecer zonas protegidas y apoyar la recuperación de especies amenazadas. Se debe dar respuesta al cambio climático aplicando soluciones basadas en la naturaleza a fin de mejorar la conectividad entre las zonas protegidas, conservadas y de desarrollo sostenible en todas las zonas económicas exclusivas marítimas y terrestres. Aunque este planteamiento no implica el alto al desarrollo, este no puede mantenerse a costa de la naturaleza y la humanidad. Deben integrarse y optimizarse las iniciativas que tengan en cuenta la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños, y han de complementarse entre sí en todas las zonas y poblaciones; asimismo, debe acelerarse la transición hacia la economía sostenible. Los enfoques sistemáticos e integrados basados en zonas pueden aumentar la resiliencia y fomentar un desarrollo económico saludable en todas las zonas. Esos enfoques requieren conocimientos especializados y diferentes conjuntos de políticas para las tierras y las aguas públicas y privadas.

32. Del mismo modo, la creación de zonas económicas especiales actualizadas, sujetas a una reglamentación y administración también especiales, debe tener en cuenta las opiniones, métodos y gobernanza indígenas cuando incluyan territorios indígenas. Es importante que las partes interesadas colaboren en la formulación de hipótesis durante las etapas de inicio, financiación e implementación, y esas hipótesis deberían fijar como meta la facilitación a nivel local y nacional de la adaptación ecológica y de las economías circulares azules y verdes. Las zonas mencionadas podrían amplificar el impacto de la financiación pública al atraer tanto AOD como inversión extranjera directa para proyectos públicos y privados. Además, el FMI debería crear un mecanismo para emitir anualmente DEG, que se asignarían en función de la administración del capital natural, con el fin de ayudar a los países a cumplir sus compromisos en materia de clima, biodiversidad y desarrollo sostenible. En particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados necesitan crear espacios fiscales para dichas inversiones y disponer garantías activas para el apalancamiento financiero por parte de los bancos multilaterales.

33. Se necesitan iniciativas específicas para transformar las economías grises tradicionales en economías verdes y azules sostenibles, mientras que la financiación debe basarse en balances integrados que se sirvan de una combinación de contabilidad ambiental y económica. Así, el capital natural renovable podría tenerse en cuenta en los planes, a fin de propugnar la salud de los ecosistemas y el flujo de los recursos, y asimismo potenciar la resiliencia económica frente a las crisis inducidas por el clima. Debe hacerse uso de tecnologías innovadoras y de bajo costo para hacer seguimiento tanto de la naturaleza como de las empresas, con miras a evaluar periódicamente las iniciativas particulares y garantizar que se obtienen los resultados previstos. Los avances en la triple cuenta de resultados han de reflejarse con transparencia en los balances de todas las entidades activas, y ha de priorizarse la descarbonización de los sectores de la energía, el transporte, la agricultura y los productos del mar, a fin de mitigar los efectos de la contaminación. El factor humano ocupa un lugar central y es fundamental para promover un Gobierno equitativo, una gestión eficaz y resultados en materia de conservación y desarrollo. Los diferentes titulares de derechos, como los indígenas, la juventud, las mujeres y las minorías, deben poder participar en la conservación basada en áreas fuera de las zonas protegidas. Es necesario apoyar los medios de vida sostenibles y garantizar la integración de la perspectiva de género al crear empleo en el ámbito de la economía sostenible, con el fin último

de alcanzar el pleno empleo, dejando a los Gobiernos como empleadores de última instancia.

34. **La Sra. Thompson Ramírez** (Observadora de Panamá) dice que su país reafirma su compromiso de enfrentar los graves impactos del cambio climático incorporando el tema a las políticas nacionales y a las iniciativas de cooperación. Además, Panamá reconoce su obligación de tomar un rol proactivo para limitar la degradación del océano, que desempeña un papel esencial como fuente de alimentos y vía del 90 % del comercio mundial. Ese mismo mes, el Gobierno de Panamá se convirtió en el primer país centroamericano en acoger la Conferencia “Nuestro Océano”, que busca promover el diálogo entre los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la juventud y las instituciones académicas y científicas, para discutir la protección y el uso sostenible de los recursos marinos. En la Conferencia se adoptaron compromisos relativos al cambio climático, la economía azul y las áreas marinas protegidas, por un valor de más de 22.000 millones de dólares para la protección del océano.

35. Como muestra de su compromiso, Panamá ya logró su objetivo de conservar el 30 % de los hábitats terrestres y marinos antes de 2030, e inició el proceso de descarbonización de su canal interoceánico, con miras a que sea neutro en carbono antes de 2030. El Gobierno de Panamá cuenta con una política nacional de océanos, como parte de su contribución al esfuerzo mundial por el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos, y un plan nacional de género y cambio climático, que busca empoderar a las mujeres e integrarlas en los proyectos destinados a construir un país bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. El Gobierno de Panamá se ha comprometido a luchar contra el cambio climático mediante la adaptación, la mitigación y fortalecimiento de la resiliencia; sin embargo, para ello se requieren mayores recursos financieros e inversiones sólidas. Por esta razón, es necesario un mayor apalancamiento de la financiación climática para continuar avanzando hacia la implementación del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

36. La cooperación internacional permite profundizar las alianzas, los acuerdos y los compromisos, para hacer frente a los desafíos que exigen respuestas coordinadas. Se necesitan esfuerzos conjuntos, un multilateralismo inclusivo y una cooperación internacional fortalecida para avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad y garantizar que quienes más lo necesitan obtengan acceso a los recursos de manera oportuna, efectiva y sostenible.

37. **La Sra. Hu** (Observadora del STUF United Fund), hablando también en nombre del Comité de ONG sobre

la Financiación para el Desarrollo, dice que, si bien es una cuestión de recursos, la lucha contra el cambio climático no escapa, desgraciadamente, a la tragedia de los bienes comunes: al considerarse el planeta un bien común, se olvidan fácilmente las responsabilidades colectivas, y a las naciones individuales les cuesta asumir responsabilidades de liderazgo. En consecuencia, esa tragedia se traduce asimismo en dificultades para dedicar recursos financieros a las soluciones. Para ampliar de manera efectiva la cooperación para el desarrollo en el ámbito de la resiliencia climática, todos los países deben mejorar sus planes de acción nacionales agregando mecanismos dirigidos a aumentar la participación local en la formulación y aplicación de políticas. Al hacerlo, es necesario centrarse en las personas y en las comunidades, y no en los beneficios empresariales. Además, los Estados deben desinvertir en el sector de los combustibles fósiles y poner fin a todas las subvenciones en ese ámbito, mientras que el FMI ha de emitir DEG para financiar las transiciones de los países desde la energía basada en combustibles fósiles hacia las energías alternativas, con vistas a posibilitar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La fórmula para calcular la asignación de los DEG debe tener en cuenta la conservación de la biodiversidad y la protección social, en lugar del producto interno bruto per cápita. Se necesitan asimismo medidas para garantizar que las mujeres, los jóvenes, los Pueblos Indígenas y todos los trabajadores cuyo empleo depende de un planeta sano puedan participar en los procesos de adopción de decisiones que afectan a sus derechos humanos y a su dignidad.

38. **La Sra. Rubio** (Observadora de la República Dominicana) dice que el cambio climático y sus efectos devastadores exigen solidaridad con quienes tienen menos posibilidades para enfrentarlos eficazmente. En ese contexto de profundas complejidades, es necesario promover el desarrollo sostenible y productivo para todos por medio de sinergias orientadas a avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se necesita una forma de multilateralismo más interconectado, inclusivo y eficaz, que nos impulse a trabajar unidos, dé voz a los países en desarrollo y responda a las aspiraciones de unas sociedades viables, resilientes y sostenibles. Es importante promover alianzas de cooperación Sur-Sur y triangular entre actores estatales, regionales, subregionales, del sector privado y de la sociedad civil, con el apoyo coordinado del sistema de las Naciones Unidas, para fomentar las iniciativas de colaboración en el Sur Global. Es preciso fortalecer los mecanismos de financiamiento multilateral para incluir nuevas fuentes e instrumentos de financiamiento transparentes, accesibles, concertados y no

discriminatorios que permitan a los países más vulnerables desarrollar resiliencia climática sin tener que recurrir a un mayor endeudamiento para hacer frente a las actuales crisis sanitaria, económica y ambiental.

39. A pesar de ser un pequeño Estado insular en desarrollo, la República Dominicana se compromete a encontrar y aplicar soluciones para limitar y mitigar los efectos devastadores del cambio climático, contribuir a la conservación del medio ambiente y avanzar hacia la consecución de los Objetivos de forma resiliente. Como miembro del comité creado para examinar la cuestión de las pérdidas y daños en el 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la República Dominicana se esforzará por formular recomendaciones para la puesta en marcha de un fondo que atienda las necesidades derivadas de las pérdidas y daños relacionados con el clima en los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y otros países vulnerables. Asimismo, como miembro del comité preparatorio de la Cuarta Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, pronta a celebrarse, la República Dominicana asume el compromiso de crear estrategias transformadoras que hagan frente a los desafíos climáticos que obstaculizan el desarrollo sostenible. Ningún país es tan pequeño como para no tener nada que ofrecer ni tan rico como para no abrirse a la colaboración mutua, y ha llegado el momento de gestionar mejor la cooperación internacional con el fin de mejorar la calidad de vida de todos.

40. **La Sra. Albornoz** (Observadora del Ecuador) afirma que es muy importante contar con un financiamiento adecuado, sobre todo en los ámbitos relacionados con la transición ambiental. El Ecuador es extremadamente vulnerable al cambio climático y se enfrentará a temperaturas medias más altas a finales de siglo. Las graves alteraciones e intensificaciones de los fenómenos climáticos naturales, como el fenómeno de El Niño, ejercen un impacto considerable sobre la soberanía alimentaria, la agricultura, la ganadería, la acuicultura y la pesca, así como sobre la producción y los precios en los sectores de la alimentación, el comercio, el transporte y las infraestructuras, tanto en zonas urbanas como rurales. Aunque el Ecuador genera emisiones marginales de gases de efecto invernadero, se ha comprometido a luchar contra el cambio climático con la plena aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Ambos instrumentos deben aplicarse de manera que reflejen la equidad y el principio de

responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas.

41. En 2019, el Ecuador formuló su primera contribución determinada a nivel nacional, que abarca el período de 2020 a 2025 y cuenta además con un plan de implementación que refleja el compromiso nacional de lucha contra el cambio climático. En 2021, el Ecuador presentó una estrategia nacional de financiamiento climático, que comprende tres líneas estratégicas para su aplicación, a saber, gobernanza clara y efectiva del financiamiento climático; consolidación de un sistema financiero que integre transversalmente el enfoque climático; y acceso a la movilización y gestión efectiva y eficiente del financiamiento climático. Esta estrategia permitirá fortalecer los programas de mitigación y adaptación y alcanzar un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, sin comprometer los esfuerzos nacionales para erradicar la pobreza y buscar el desarrollo sostenible. El Ecuador fue el cuarto país de América Latina y el Caribe en contar con un instrumento de este tipo, que promueve la transversalidad de la variable climática en la planificación presupuestaria de todos los niveles del Gobierno y facilita la movilización, el monitoreo, el reporte y la verificación del financiamiento climático de diversas fuentes.

42. El Gobierno del Ecuador ha finalizado recientemente un plan nacional de adaptación al cambio climático, que pretende integrar, adaptar y planificar el desarrollo sectorial y local, así como detectar y reducir las vulnerabilidades climáticas en los sistemas sociales, económicos y ambientales. El plan define mecanismos, objetivos y resultados esperados, en relación con la adaptación de los sectores priorizados en la estrategia nacional de cambio climático. Ese trabajo se desarrolló con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha permitido detectar las vulnerabilidades y los programas de implementación, con un énfasis compartido en la lucha contra la pobreza y el cambio climático. Esos programas pueden financiarse parcialmente con cargo al presupuesto nacional, pero ese financiamiento es insuficiente y debe complementarse con asistencia técnica y cooperación. La adaptación al cambio climático requiere la transferencia de tecnología y conocimientos, y, aunque el Ecuador ya cuenta con un diagnóstico y una estrategia, necesita la cooperación internacional para llevarlos a buen puerto.

43. **El Sr. Zuhuree** (Observador de Maldivas) dice que el cambio climático afecta a la vida cotidiana de su país, debido a su impacto en el océano, que es clave para la identidad de Maldivas y surte al país de alimento e ingresos. Restan apenas 81 meses para proteger los

hábitats terrestres y marinos reduciendo a la mitad las emisiones mundiales; sin embargo, la comunidad internacional no va por buen camino si desea cumplir ese objetivo en la fecha prevista en el Acuerdo de París. El mínimo aumento de la temperatura global provocará la pérdida de vidas, medios de subsistencia, activos, especies y ecosistemas, y planteará cuestiones existenciales sobre la aptitud de la humanidad para vivir en el planeta. Maldivas enfrenta innumerables carencias como pequeño Estado insular en desarrollo, especialmente en lo referido a la financiación de la adaptación y a las pérdidas y daños. Los países en desarrollo y vulnerables han bregado duramente a lo largo de mucho tiempo con el objetivo de establecer nuevos mecanismos para la financiación de las pérdidas y los daños; esos mecanismos incluyen un nuevo fondo idóneo para alcanzar los fines perseguidos y la participación de todas las instituciones financieras mundiales.

44. Mientras las naciones del Caribe y el Pacífico se enfrentan al impacto devastador de huracanes y ciclones sucesivos, Maldivas lidia con los efectos más graduales del cambio climático, como la erosión costera y la infiltración de salinidad. Estos fenómenos han afectado al sistema alimentario local por la pérdida de fertilidad del suelo, y también a los sistemas de abastecimiento de agua potable, y la pérdida generalizada de reservas de agua dulce ha hecho necesaria la instalación de sistemas de desalación. Para Maldivas, por tanto, la financiación climática está estrechamente relacionada con el desarrollo, especialmente en los ámbitos del agua y la seguridad alimentaria, y, si bien debe robustecer sus infraestructuras, su sociedad y su economía para aumentar su resiliencia al cambio climático, su capacidad para ello se ve mermada porque la adaptación y la resiliencia están considerablemente infrafinanciadas. Los países en desarrollo necesitan un paquete de medidas de apoyo solidario que resulte fiable, del orden de los 100.000 millones de dólares cada año, y los asociados para el desarrollo deben duplicar, como poco, la financiación de la adaptación.

45. La graduación como país de ingreso mediano-alto ha restringido el acceso de Maldivas a subvenciones y a financiación en condiciones favorables, lo que, a su vez, limita su capacidad para emprender una adaptación transformadora. El aumento de los tipos de interés a escala mundial y la insostenibilidad de la deuda son otros problemas que dificultan la obtención de préstamos y financiación. Si bien la descarbonización de la economía a través de inversiones en energía verde es un requisito para volver a la senda del logro de los objetivos del Acuerdo de París, siguen sin cumplirse muchas promesas al respecto. Todos los flujos

financieros en el seno de la economía mundial deben ser coherentes con el artículo 2 del Acuerdo de París, y han de seguir explorándose los bonos de impacto social y en el desarrollo, los mecanismos de crédito climático, las transferencias fiscales verdes, los bonos verdes y los mecanismos de producción colectiva, con el objetivo de mejorar la resiliencia climática. Asimismo, deben explorarse los acuerdos multilaterales para la financiación combinada y las mejoras crediticias, con miras a reducir el costo de endeudamiento y satisfacer las necesidades de financiación soberana. Hace falta movilizar fondos del sector privado para dirigirlos a medidas sectoriales específicas, como la integración de las energías renovables y, lo que es más importante, hay que reforzar las sinergias y la colaboración entre los asociados para el desarrollo.

46. **El Sr. Reis** (Observador de Angola) dice que a los países africanos les resulta especialmente difícil implementar la Agenda 2030 y la Agenda 2063: el África que Queremos. Pese a las presiones ejercidas sobre sus sistemas de salud y de protección social, así como sobre sus sectores de financiación pública, los países africanos han avanzado durante los últimos decenios en la movilización de recursos para invertir en los ámbitos de las infraestructuras y la prestación de servicios. Estos recursos han hecho posible el crecimiento inclusivo y el progreso socioeconómico. Las múltiples crisis han hecho mella en África y las subidas de los precios de la energía y los alimentos han agravado una situación de por sí precaria. El 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático marcó el inicio de una etapa histórica en la labor encaminada a la lucha contra el cambio climático. La creación del fondo de pérdidas y daños es un logro importante; las partes interesadas deben tomar las medidas precisas para que sea operativo.

47. Angola ha hecho esfuerzos considerables por lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible e implementar la Agenda 2063, privilegiando al mismo tiempo la erradicación del hambre. El Gobierno de Angola se halla en una coyuntura crítica y necesita fijar prioridades sostenibles para su plan nacional de desarrollo 2023-2027. La meta es lograr los Objetivos mediante la creación de capacidad y la modernización y expansión de las infraestructuras, poniendo el foco asimismo en la movilidad sostenible, la digitalización y la diversificación económica en los sectores de los agronegocios y el turismo. Angola busca tender alianzas con la sociedad civil, el sector privado y los asociados internacionales para aplicar de manera efectiva su plan nacional de desarrollo. Su principal desafío a corto y mediano plazo es la implementación de la Agenda 2030.

El Gobierno de Angola necesita reequilibrar las necesidades macroeconómicas para mantener la balanza de pagos y estabilizar el poder adquisitivo de la moneda nacional, manteniendo al mismo tiempo la recuperación económica y ejecutando programas socioeconómicos de lucha contra la pobreza tras la pandemia de COVID-19.

48. A fin de superar esos desafíos, es fundamental seguir reforzando las alianzas entre las Naciones Unidas y África, y ayudar a la Unión Africana y a las agrupaciones regionales a garantizar la buena gobernanza y la resiliencia frente al cambio climático.

49. **La Sra. Kavaleuskaya** (Observadora de Belarús) dice que la delegación de su país desea expresar su solidaridad con los trabajos dirigidos a ayudar a los países en desarrollo a afrontar la agenda climática. Sin embargo, es importante que en la adaptación al cambio climático se tengan en cuenta los intereses no solo de los Estados más vulnerables, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, sino también de las economías en transición y los países de ingreso mediano. El apoyo internacional y las alianzas efectivas podrían aumentar el potencial de estos países para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

50. Revisten especial importancia las alianzas regionales. La Unión Económica Euroasiática y la Comunidad de Estados Independientes, por ejemplo, promueven el robustecimiento del comercio, la inversión y otros lazos con miras a mejorar el bienestar ambiental de todos los Estados Miembros de la región. Por lo contrario, las sanciones unilaterales ejercen un impacto negativo en la cooperación para el desarrollo. Del mismo modo, la delegación de Belarús no puede aceptar la subordinación de la asistencia técnica prevista en los marcos ambiental y climático a consideraciones de orden político.

51. El desarrollo con bajas emisiones de carbono es un objetivo compartido que solo puede alcanzarse mediante la cooperación entre las partes interesadas. Por ello, Belarús acogió con beneplácito las decisiones adoptadas durante el 26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en virtud de las cuales las economías en transición reciben apoyo para preparar sus comunicaciones nacionales e informes bienales, así como para actualizar y aplicar regularmente sus estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones en consonancia con sus prioridades nacionales. En 2021, Belarús anunció su compromiso nacional de reducir, antes de 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero un 35 %, por debajo de los niveles de 1990. A fin de alcanzar el cero neto en emisiones antes de 2050, los países

desarrollados han de cumplir sus propias obligaciones lo antes posible, como señala el artículo 4 del Acuerdo de París.

52. **El Sr. De Rezende Pinto** (Brasil) dice que el Gobierno de su país concede gran importancia a la financiación climática que se destina a las medidas de prevención y reducción de riesgos en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Es esencial que los países desarrollados cumplan sus compromisos al respecto, incluida la promesa de duplicar la financiación para la adaptación al cambio climático. El fondo de adaptación al cambio climático, uno de los más importantes para los países en desarrollo y el único destinado íntegramente a la adaptación, ha demostrado su eficacia. Resulta aún más importante mantener la sostenibilidad del fondo, habida cuenta de la gravedad, la frecuencia y el alcance de los daños y pérdidas asociados a los efectos adversos del cambio climático, que pueden producirse cuando la adaptación no se ha aplicado de forma óptima o cuando se han alcanzado sus límites. Cada vez hay más respuestas relacionadas con la adaptación; no obstante, la visibilidad y la eficacia de estas se ven limitadas por el acceso institucional, financiero y tecnológico. Urge modificar el perfil de la relación riesgo-rentabilidad de los proyectos de adaptación, potenciar el desarrollo, la transferencia y el despliegue de tecnologías de adaptación, y aumentar la proporción de la financiación climática que se inmoviliza para fines de adaptación. Asimismo, debe facilitarse el acceso a la financiación para el desarrollo.

53. El Brasil acoge con gran agrado la decisión de crear un fondo de pérdidas y daños y subraya la necesidad de que entre en funcionamiento lo antes posible. El debate sobre el cambio climático debe avanzar en consonancia con las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. A la hora de movilizar y asignar recursos climáticos deben tomarse en consideración las diferencias entre la financiación climática y la AOD. Del mismo modo, los criterios para la asignación de la financiación climática no han de simplificarse en exceso ni abocar a la exclusión involuntaria de los países en desarrollo, afectados de forma desproporcionada por los efectos del cambio climático. El Brasil, que sufre las nefastas consecuencias del cambio climático, ha reforzado su gobernanza en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres, a efectos de promover una resiliencia que integre los diversos compromisos del país. El Gobierno del Brasil ha aprobado un plan nacional de gestión de riesgos y respuesta en casos de desastre, y ha instituido un sistema nacional de

protección y defensa civil. En la misma línea, ha orientado la inversión pública hacia programas destinados a fomentar la resiliencia de las infraestructuras de servicios básicos, y ha promovido asimismo la participación en esos programas de la inversión privada. Sin embargo, para obtener los resultados deseados, las iniciativas a nivel nacional deben estar respaldadas por una cooperación internacional efectiva.

54. A la luz de lo anterior, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) podría reforzar las alianzas entre los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas para integrar más eficazmente los recursos con un enfoque multipartito y multidisciplinar, con miras a aumentar la resiliencia, reducir el riesgo de desastres y facilitar las respuestas de emergencia en la recuperación y reconstrucción tras los desastres. A ese fin, la UNDRR podría plantearse ahondar en la colaboración con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y organizaciones similares. El Brasil está dispuesto a contribuir a la cooperación internacional en favor de la prevención del riesgo de desastres.

55. **El Sr. Akram** (Representante Permanente del Pakistán ante las Naciones Unidas), en respuesta a la petición del representante de Côte d'Ivoire de que se facilite más información sobre la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños, dice que no ha sido fácil convencer a determinados países de que acepten la creación de ese fondo, y que el documento relativo a su creación incluye texto que dificultará notablemente su materialización. Además, se plantean cuestiones relativas a las fuentes de financiación y algunos han sugerido que esta proceda de fondos y servicios existentes, para evitar la necesidad de movilizar recursos adicionales. Será todo un reto, pero es de esperar que se alcance un acuerdo durante el siguiente período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

56. **La Sra. Betancur González** (Directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia) dice que es necesario renovar la narrativa de las alianzas estratégicas para la movilización de recursos y replantear la comunicación con los diferentes públicos. Se necesitan alianzas estratégicas con los proveedores de financiación pública y privada, la filantropía y la AOD, para que los mecanismos funcionen con financiación mixta. Pese a las muchas percepciones negativas, la comunidad internacional debe trabajar unida para difundir un mensaje firme sobre la necesidad de proteger el planeta, con el objetivo de convencer a otros de que se comprometan en la lucha

contra el cambio climático y desarrollen estrategias nuevas e innovadoras al respecto.

57. **El Sr. Akram** (Representante Permanente del Pakistán ante las Naciones Unidas) dice que, si bien ha insistido en la necesidad de financiación pública, las cantidades existentes que se pueden determinar no superan los 1.300 millones de dólares anuales. Sin embargo, solo para el desarrollo hacen falta unos 4.200 millones de dólares. Cuando se tiene en cuenta también la resiliencia climática, se necesita casi el doble de esa cantidad. Por tanto, urge encontrar soluciones para subsanar el déficit de financiación en los ámbitos del desarrollo y el clima. Algunos consideran que la arquitectura financiera internacional está en quiebra moral y que los países en desarrollo presentan, por definición, carencias en materia de gobernanza. En este sentido, la condición impuesta por el FMI de contar con una gobernanza perfecta o casi perfecta para poder acceder a la financiación se convierte en una traba importante para la cooperación. Es necesario cambiar esas premisas del FMI, pues una gran parte de la financiación que puede movilizarse oficialmente debe ir acompañada de algún tipo de garantía. Además, ha llegado el momento de renovar la definición de financiación combinada. A diferencia de los países desarrollados, los países en desarrollo se enfrentan a tipos de interés muy elevados, lo que dificulta enormemente la obtención de financiación en el mercado y no es viable en el caso de grandes proyectos. Hay que movilizar recursos de forma que sea posible invertir en desarrollo. En la búsqueda de soluciones, se tomarán en cuenta las peticiones de reforma de la arquitectura financiera, pese a las dificultades previsibles.

58. **El Sr. Sylla** (Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)) dice que el FMI no financia proyectos, pues su atención se centra en los presupuestos nacionales y en la balanza de pagos. Los presupuestos nacionales reflejan todas las políticas aprobadas por los Estados y los medios desplegados para financiar sus proyectos. Cuando interviene para sanear los presupuestos nacionales y la balanza de pagos, el FMI brinda a los Estados, de manera automática, los recursos necesarios para financiar proyectos en el marco de sus estrategias nacionales de desarrollo. Con la llegada de la actual crisis climática y su impacto macrocrítico, el FMI ha creado el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Estabilidad, que se suma a los instrumentos ya existentes, para permitir a los países acceder a recursos, en función de una evaluación de sus políticas nacionales realizada por el Banco Mundial. Las medidas precisadas en el curso de

esa evaluación son financiadas por el FMI en condiciones favorables y relativamente accesibles.

59. A lo largo del debate se ha hecho un llamamiento generalizado al multilateralismo, pero este no será eficaz si se señala con el dedo a algunos actores y los Estados se enzarzan en acusaciones mutuas. Asimismo, no hay que olvidar que el único fin del FMI es intervenir en los ámbitos de las finanzas públicas y la balanza de pagos. El Fondo ha reconocido que precisa evolucionar y adaptarse a las crisis actuales mediante la creación de un nuevo instrumento, como hizo expeditivamente para responder a la pandemia de COVID-19, y, si se diera la ocasión, no dudaría en colaborar con otros donantes para ayudar a crear nuevos mecanismos. Aunque varios oradores han mencionado los DEG, hay que remarcar que estos no son la panacea y que su función no es la de un instrumento de desarrollo. Antes bien, se diseñaron para aumentar las reservas de los bancos centrales en tiempos de crisis. Los DEG podrían utilizarse ocasionalmente para otros fines, pero no se debería depender de ellos a largo plazo. Habida cuenta de la magnitud de las necesidades que es necesario satisfacer, los DEG se revelan en gran medida insuficientes, siendo su utilidad mayor si son apalancados. Es necesario movilizar a la ciudadanía y presionar a los Gobiernos, pues las asambleas y los presupuestos nacionales son las únicas fuentes viables de nuevos recursos y representan la sola esperanza de reforma en aras de mitigar el impacto del cambio climático.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas.